



**JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 8
MURCIA**

SENTENCIA: 00247/2016

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

CIUDAD DE LA JUSTICIA S/N, FASE 2, MODULO 3 - 2ª PLANTA; C.P. 30011

Teléfono: 968277441-968277442

Fax: 968 879577

Equipo/usuario: EGR

Modelo: N04390

N.I.G.: 30030 42 1 2015 0020801

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001716 /2015

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

D/ña.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

D/ña. BANKIA SA

Procurador/a Sr/a. JOAQUIN MARIA JAÑEZ RAMOS

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA N° 247/2016

En Murcia, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis.

El Ilmo. Sr. D. Edmundo Tomás García Ruiz, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Murcia, ha visto los presentes autos de juicio ordinario nº 1716/15, promovidos por D. F.J. y Dª. M.M., representados por la Procuradora Dª. Ana Galiano Quetglas y defendidos por el Letrado D. Carlos Arnau Martínez, contra "Bankia, S.A.", representado por el Procurador D. Joaquín Jáñez Ramos y defendido por la Letrada Dª. María José Cosmea Rodríguez, sobre nulidad de contrato bancario y reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Procuradora D^a. Ana Galiano Quetglas, en nombre y representación de D. F.J. y D^a. M.M., se presentó demanda de juicio ordinario contra "Bankia, S.A.", que fue turnada a este Juzgado, en la que solicitaba que se dicte sentencia por la que: 1.- Se declare la nulidad de la siguiente cláusula de la escritura de préstamo hipotecario, de fecha 25 de marzo de 2009: "en ningún caso, el tipo de interés nominal anual aplicable será inferior al 3'50% anual o superior al 15% anual, cualquiera que fuese el tipo resultante por aplicación de los mecanismos de revisión pactados". 2- Condene a la entidad financiera demandada a eliminar dicha condición general de la contratación del mencionado contrato. 3- Condene a "Bankia" a la devolución al prestatario de la cantidad de 9.865'31 €, que ha sido abonada de más como consecuencia de la aplicación de la referida cláusula, con sus intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro. 4- Subsidiariamente, condene a "Bankia" a la devolución a la parte demandante de cuantas cantidades haya cobrado desde el 9 de mayo de 2013 hasta la resolución definitiva del proceso, como consecuencia de la aplicación de la referida cláusula, que limita la variación del tipo de interés, con sus intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro periódico y hasta su efectiva restitución. 4- Condene a "Bankia" al pago a favor del prestatario de todas aquellas cantidades que se vayan pagando por el prestatario en virtud de la referida cláusula, con sus intereses legales devengados desde la fecha de interposición de la demanda. 5- Condene a "Bankia" a recalcular y rehacer, excluyendo la cláusula suelo, el cuadro de amortización del préstamo hipotecario a interés variable de los demandantes, que regirá en lo sucesivo, contabilizando el capital que efectivamente debió ser amortizado, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia. 6- Condene a la parte demandada al pago de las costas procesales.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la parte demandada para que en el plazo de veinte días contestase la demanda formulada en su contra con los apercibimientos legales correspondientes.

Tercero.- Emplazada en legal forma, por el Procurador D. Joaquín Jáñez Ramos, en nombre y representación de "Bankia, S.A.", se presentó escrito de contestación a la demanda, solicitando que se dicte sentencia desestimatoria con imposición de costas procesales a la parte actora.

Cuarto.- Se convocó a las partes para la celebración de audiencia previa, en la que ratificaron sus escritos iniciales y se dio cumplimiento al resto de previsiones legales sobre alegaciones aclaratorias y complementarias, impugnación de documentos y fijación de hechos controvertidos.

Recibido el pleito a prueba, ambas partes propusieron documental, admitiéndose la misma y quedando los autos vistos para sentencia.

Quinto.- En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Pretensiones de las partes.

Solicita la parte actora la nulidad de la condición general tercera bis de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria otorgada en fecha 25 de marzo de 2009, correspondiente a la denominada cláusula suelo, contenida en el apartado "límite a la variación del tipo de interés", según la cual "en ningún caso, el tipo de interés nominal anual aplicable será inferior al 3'50% anual o superior al 15% anual, cualquiera que fuese el tipo resultante por aplicación de los mecanismos de revisión pactados". Y ello porque dicha cláusula deja inoperante la variabilidad del tipo de interés elegida por el cliente y ofrecida por la entidad, de modo que en determinadas condiciones de mercado opera como un tipo fijo en beneficio exclusivo de la entidad financiera, habiendo sido suscrita por el cliente sin haber recibido la debida información previa por parte de la referida entidad, la cual utilizó este mecanismo fraudulento para eludir el descenso de sus beneficios ante bajadas de tipos de interés. En definitiva, se ha provocado un perjuicio al cliente al no permitirle beneficiarse de la bajada del Euribor, que hasta la

fecha de presentación de la demanda ascendía a 9.865'31 €.

La parte demandada se opone a dichas pretensiones alegando, en primer lugar, que la parte actora no ostenta la condición de consumidora, ya que es farmacéutica y se constituyó la hipoteca sobre el inmueble que ocupa la propia oficina de farmacia. En relación con la concreta cláusula debatida expone que la STS. de 9 de mayo de 2013 ha declarado su licitud, si bien deben someterse al control de transparencia en cada caso individual, de modo que será abusiva y nula si no permite al consumidor identificarla como definidora del objeto del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos, declarando en todo caso la irretroactividad de la declaración de nulidad, por lo que no afectará a las situaciones efectivamente decididas por resolución judicial firme ni a los pagos efectuados en la fecha de su publicación.

Y en este caso concreto, la cláusula es clara y transparente, pues está incluida en la estipulación relativa a los intereses ordinarios, aparece con los tipos en letra negrita y el título subrayado, su redacción es clara y sencilla, por lo que permite comprender que se está definiendo el objeto principal del contrato, esto es, el precio y la obligación de pago. Además, la misma fue negociada individualmente, teniendo en cuenta el perfil de los demandantes y la información previamente suministrada, de lo que deja constancia el notario en la escritura. Por último, alude a la aplicación de la doctrina de los actos propios, ya que se ha venido aplicando durante 7 años, y se respeta el equilibrio entre las partes contratantes, al prever tanto una limitación a la baja como al alza.

Segundo.- Condición de consumidores de los demandantes.

Con carácter previo, se debe reconocer a los demandantes la cualidad de consumidores en el ámbito de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria sobre la que versa este procedimiento, con independencia de que la hipoteca se constituyera sobre un local de negocio destinado a farmacia.

A tales efectos, el RDL 1/2007, de 16 de

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, atribuye esta condición a "las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión", así como a "las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial" (artículo 3), y la de empresario a la "persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión" (artículo 4).

Por ello, la SAP. Murcia (Sección 4ª) de 27 de octubre de 2016, aludiendo al art. 2.b de la Directiva 1993/13/CEE, según la cual ha de entenderse por consumidor a toda persona física que, en los contratos regulados por la Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional, considera que "la clave está en atender a la finalidad del acto y determinar cuál era el destino del crédito".

Y añade dicha resolución que "en todo caso, el que el bien financiado fuese un local comercial no significa que los actores pierdan la condición de consumidores, ya que no hay prueba alguna de que en ese momento el destino de ese local fuese aplicarlo a su actividad profesional o empresarial, que no consta, siendo perfectamente posible que la compra fuera una inversión patrimonial.

Por último, y en cuanto a la carga de la prueba, ya ha dicho este Tribunal en precedentes ocasiones (entre otras, en sentencia de 30 de junio de 2016 y 6 de octubre de 2016), haciéndonos eco de la SAP de Pontevedra de 19 de enero de 2016, que en la práctica forense existe una especie de presunción, a falta de prueba sobre la cuestión, de la condición de consumidor de los prestatarios personas físicas".

En el presente caso, no consta que el destino del préstamo garantizado con la hipoteca constituida sobre el local comercial fuese la actividad comercial o empresarial de los prestatarios, de oficina de farmacia o cualquier otra, ya que ninguna referencia se hace en este sentido en la escritura pública.

Es cierto que en la condición financiera séptima se expone que "las condiciones financieras de la presente operación están determinadas atendiendo a la

condición de Farmacéutico y titular de Oficina de Farmacia del Prestatario y su obligación de domiciliar en Bancofar, S.A. los abonos que por cuenta de la Seguridad Social o de la entidad análoga que le corresponda, así como el pago de los recibos que le gire su principal proveedor de medicamentos". Pero la consecuencia que anuda al incumplimiento de dicha obligación, según continúa la cláusula, no es otra que el aumento en medio punto del tipo de interés vigente del préstamo, por lo que hace referencia únicamente a una nueva garantía de cobro de las amortizaciones de principal e intereses del préstamo, sin ninguna alusión al destino de la cantidad prestada (200.000 €).

Tercero.- Requisitos para la validez de la cláusula suelo.

Como han puesto de manifiesto ambas partes, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó sentencia en fecha 9 de mayo de 2013, aclarado mediante auto de 3 de junio de 2013, en la que analizó la posible abusividad de las condiciones generales de contratación que limitan la variabilidad de los tipos de interés ordinarios, denominadas cláusulas suelo, destacando de dicha resolución, dado que su doctrina es sobradamente conocida, los siguientes aspectos esenciales, de plena aplicación al presente caso.

En primer lugar, viene a establecer la licitud de las cláusulas suelo cuando concurren las siguientes circunstancias:

- "Las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos, esto es, debe estar perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de referencia cuando menos a corto plazo, de tal forma que cuando el suelo estipulado lo haga previsible, esté informado de que lo estipulado es un préstamo a interés fijo mínimo, en el que las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su beneficio.

- No es preciso que exista equilibrio "económico" o equidistancia entre el tipo inicial fijado y los topes señalados como suelo y techo -máxime cuando el recorrido al alza no tiene límite-.

- Más aun, son lícitas incluso las cláusulas suelo que no coexisten con cláusulas techo y, de hecho, la oferta de cláusulas suelo y techo cuando se hace en un mismo apartado del contrato, constituye un factor de distorsión de la información que se facilita al consumidor, ya que el techo opera aparentemente como contraprestación o factor de equilibrio del suelo.

- En definitiva, corresponde a la iniciativa empresarial fijar el interés al que presta el dinero y diseñar la oferta comercial dentro de los límites fijados por el legislador, pero también le corresponde comunicar de forma clara, comprensible y destacada la oferta. Sin diluir su relevancia mediante la ubicación en cláusulas con profusión de datos no siempre fáciles de entender para quien carece de conocimientos especializados -lo que propicia la idea de que son irrelevantes y provocan la pérdida de atención-. Sin perjuicio, claro está, de complementarla con aquellos que permitan el control de su ejecución cuando sea preciso".

En segundo lugar, aunque la cláusula suelo afecta a un elemento esencial del contrato y cumple una función definitoria del mismo, en concreto al precio, esta resolución declara posible que se verifique un control judicial sobre la abusividad de su contenido mediante el doble control de transparencia.

En este control se incluye un primer filtro, consistente en comprobar si se cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Condiciones Generales de la Contratación para la incorporación de las cláusulas de determinación de los intereses y sus oscilaciones en función de las variaciones del Euribor, tanto si se suscriben entre empresarios y profesionales, como si se suscriben entre estos y consumidores (artículo 7 LCGC).

A su vez, existe un segundo filtro que comprende el control de la comprensibilidad real de su

importancia en el desarrollo razonable del contrato, de conformidad con el 80.1 TRLCU cuando dispone que "en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente [...], aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa [...]-;b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido".

Y en relación a ello considera que las concretas cláusulas que se analizan en aquella sentencia no superan este segundo control de transparencia por las siguientes razones:

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas.

c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.

e) Se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.

En relación a este punto, indica la STS que estas cláusulas "no pueden estar enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en los que los matices que introducen en el objeto percibido por el consumidor como principal puede verse alterado de forma relevante."

Aunque esta sentencia se dictó en un procedimiento de acciones colectivas de nulidad, la STS 139/2015, de 25 de marzo de 2015, asumió ese mismo criterio cuando fuera el particular por sí mismo quien ejercitarse la nulidad de la cláusula suelo.

A su vez, el anteriormente citado auto de aclaración de 3 de junio de 2013 indicó en su apartado 12 que "A la vista de lo razonado en la sentencia y de los términos del fallo queda claro que las circunstancias enumeradas constituyen parámetros tenidos en cuenta para formar el juicio de valor abstracto referido a las concretas cláusulas analizadas. No se trata de una relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra. Tampoco determina que la presencia aislada de alguna, o algunas, sea suficiente para que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo".

Y en su apartado 17 que "La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable, cuando el índice de referencia o su evolución, previsible para el profesional, a corto o medio plazo lo convertirán en interés mínimo fijo, variable nada más al alza, constituye uno de los diferentes supuestos de falta de transparencia y de cláusula abusiva, sin necesidad de que concurra ningún otro requisito".

Cuarto.- Doble control de transparencia.

Aplicando esta doctrina al presente supuesto, del análisis de la escritura de 25 de marzo de 2009 se desprende que la cláusula suelo allí establecida no supera el doble control de transparencia y, por lo tanto, procede la declaración de su nulidad.

Así, la referida cláusula se incluye en la estipulación tercera bis de la citada escritura ubicada entre una abrumadora cantidad de datos entre los que queda enmascarada y que diluyen la atención del consumidor, pues en ella se detalla cómo se calculan los intereses de cada cuota, el tipo de interés durante el primer periodo de doce meses, el cálculo del tipo de interés durante los restantes periodos de doce meses, la fórmula financiera que determinará la composición y cuantía de cada una de

las cuotas mixtas de amortización y abono de interés del préstamo una vez producida la variación del tipo de interés remuneratorio pactado y el porcentaje de variación que haya que sumar al tipo de referencia para calcular el tipo de interés una vez transcurrido el primer periodo de doce meses del préstamo.

Y tras todos estos datos se añade el apartado denominado "límites a la variación del tipo de interés", que fija propiamente la cláusula suelo, indicando que el mismo no podrá ser inferior al 3'50% nominal anual o superior al 15'00 anual, cualquiera que fuese el tipo resultante por aplicación de los mecanismos de revisión pactados. Esto es, se incluyen en el mismo párrafo las cláusulas suelo y techo, creando una apariencia de contraprestación entre ambas.

Se advierte, por tanto, en palabras del Tribunal Supremo que la cláusula "se encuentra enmascarada entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro".

Al margen de lo anterior, tampoco se cumplen en este caso el resto de requisitos previstos por la comentada sentencia para considerar que la cláusula es transparente, y, por tanto, lícita, así:

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

b) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

c) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.

En base a todo lo anteriormente expuesto, debe estimarse la demanda, declarando la nulidad y eliminación de la cláusula.

Esta doctrina ha sido acogida, como no podía ser de otra forma, por la Audiencia Provincial de Murcia.

A título de ejemplo, el auto de la Sección 1ª n° 404/15, de 21 de septiembre de 2015, declara: "En cuanto a la cláusula suelo, procede acoger la nulidad solicitada ... porque estimamos que existe falta de transparencia al insertar la cláusula suelo (4%) de forma conjunta con la cláusula techo (8,50%) o tipo máximo de interés, ocasionando ello una distorsión de la información que se facilita al consumidor al operar el techo aparentemente como una contraprestación o factor de equilibrio del suelo, no acreditándose, en cualquier caso, que se hicieran simulaciones de escenarios diversos relacionados con el vigente al momento de contratar, al menos a corto plazo, y al objeto de que el prestatario se encontrara informado de que lo estipulado en realidad era un préstamo a interés fijo mínimo, donde las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no repercutirían o lo harían de forma imperceptible en su beneficio. Falta de información, que adquiere mayor relevancia al tratarse de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

La cláusula objeto de análisis es compleja y de difícil comprensión, pues no se recoge de manera clara y destacada que cuando el tipo de interés baja a determinados niveles, el préstamo se transforma en un préstamo a interés fijo variable sólo al alza y no se beneficiarían de las bajadas del índice de referencia (en general Euribor), no constando que se les explicara en su momento a los hoy apelantes y de forma adecuada todo ello, procediendo, en base a lo expuesto, declarar nula por abusiva la cláusula suelo en su día pactada, estableciendo que se aplique el interés de referencia más el porcentaje convenido, y ello se aplicará a partir de la fecha en que se activó la cláusula suelo respecto a las cuotas incumplidas, pues del documento número siete de la demanda (folios 108 y siguientes), acta de certificación de saldo, se desprende que efectivamente llegó a activarse y aplicarse la misma, debiendo hacerse, por consiguiente, una nueva liquidación, siendo de precisar que en el supuesto enjuiciado no se solicita la devolución de cantidades, razón por la que la nulidad debe extender sus efectos a la fecha en que se activa la cláusula suelo aun cuando tan sólo, tal y como se ha dicho anteriormente, respecto de las cuotas incumplidas".

Quinto.- Retroactividad de los efectos de la declaración de nulidad.

Es cierto que la citada sentencia del Alto Tribunal rechaza la eficacia retroactiva declarando que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 1303 del Código Civil sobre el efecto retroactivo en caso de nulidad contractual, y teniendo en cuenta que la retroactividad de la declaración de nulidad generaría el riesgo de trastornos económicos en el mercado hipotecario y en la solvencia bancaria, en este caso "la nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia".

Pero sobre esta declaración el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la sentencia de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, a instancias de sendas cuestiones prejudiciales, declarando que "El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión".

Por tanto, ha dejado sin efecto la declaración de irretroactividad, considerando que declarada la nulidad de una cláusula, la misma debe suprimirse del contrato, sin que el juez pueda modificar su contenido realizando una labor integradora del contrato.

En definitiva, la declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido

dicha cláusula, permitiendo la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor. Lo contrario resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva.

Sexto.- Costas procesales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los juicios declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora D^a. Ana Galiano Quetglas, en nombre y representación de D. F.J. y D^a. M.M., contra "Bankia, S.A.", representado por el Procurador D. Joaquín Jáñez Ramos, debo:

1- Declarar la nulidad de la siguiente cláusula de la escritura de préstamo hipotecario de fecha 25 de marzo de 2009: "Transcurrido el primer periodo de doce meses del presente préstamo, en ningún caso el tipo de interés nominal anual aplicable será inferior al 3'50% anual o superior al 15% anual, cualquiera que fuese el tipo resultante por aplicación de los mecanismos de revisión pactados".

2- Condenar a la entidad financiera demandada a eliminar dicha condición general de la contratación del mencionado contrato.

3- Condenar a "Bankia" a la devolución a los prestatarios de la cantidad de **nueve mil ochocientos sesenta y cinco euros con treinta y un céntimos**

(9.865'31 €), que ha sido abonada de más como consecuencia de la aplicación de la referida cláusula, con sus intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro.

4- Condenar a "Bankia" al pago a favor de los prestatarios de todas aquellas cantidades que se hayan pagado por los prestatarios en virtud de la referida cláusula, con sus intereses legales devengados desde la fecha de interposición de la demanda.

5- Condenar a "Bankia" a recalcular y rehacer, excluyendo la cláusula suelo, el cuadro de amortización del préstamo hipotecario a interés variable de los demandantes, que regirá en lo sucesivo, contabilizando el capital que efectivamente debió ser amortizado, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia.

6- Condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación, que deberá ser interpuesto en el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, a través de escrito presentado en este Juzgado en la forma prevista en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su conocimiento y fallo por la Audiencia Provincial de Murcia.

De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la LO. 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, para la interposición de recurso de apelación contra esta sentencia es precisa la constitución previa de un depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, el cual deberá estar efectuado al tiempo de la interposición del mismo y acreditarse oportunamente, sin que proceda la admisión a trámite de ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.